

**Roj:** STSJ CV 1403/2017 - **ECLI:**ES:TSJCV:2017:1403  
**Órgano:** Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal  
**Sede:** Valencia  
**Sección:** 1  
**Nº de Recurso:** 16/2017  
**Nº de Resolución:** 13/2017  
**Fecha de Resolución:** 22/05/2017  
**Procedimiento:** PENAL - JURADO  
**Ponente:** MARIA PILAR DE LA OLIVA MARRADES  
**Tipo de Resolución:** Sentencia

---

### **Encabezamiento**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
SALA DE LO CIVIL Y PENAL VALENCIA**

NIG Nº 46094-41-1-2014-0000896

**Rollo de Apelación Nº 16/2017**

**Procedimiento Tribunal del Jurado Nº 10/2017 Audiencia Provincial de  
Valencia, Sección 5ª**

**Procedimiento Ley del Jurado Nº 1/2014 Juzgado de Instrucción Nº 5  
Catarroja**

### **SENTENCIA Nº 13 / 2017**

**Excma. Sra. Presidenta** D<sup>a</sup>. Pilar de la Oliva Marrades **Iltmos. Sres.  
Magistrados** D. Antonio Ferrer Gutiérrez D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Pía Calderón Cuadrado

En la Ciudad de Valencia, a veintidós de mayo dos mil diecisiete.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha visto el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Nº 59/2017, de fecha 26 de enero, pronunciada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, constituido en el ámbito de la Iltma. Audiencia Provincial de Valencia, en la causa Nº 10/2017, seguida por los trámites del procedimiento especial del Tribunal del Jurado, dimanante del Procedimiento de la Ley del Jurado Nº 1/2014, instruido por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Catarroja.

Han sido partes en el recurso, como apelantes la acusación particular ejercida por D<sup>a</sup> Natalia, D<sup>a</sup> Rosanay D. Luis Enrique, representados por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> PAULA MIGUEL RUIZ y defendidos por el Letrado D. FRANCISCO IGNACIO FERRUS MARTI, y, como parte recurrida, el acusado D. Alberto, representado por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup>. MARIA TERESA FABRA MIRO y defendido por el Letrado D. JAVIER LOPEZ MINGUEZ, y el responsable civil VALCOBROS, S.L. representado por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup>. NURIA VILLALBA GIL y defendido por el Letrado D. MARIANO FRANCISCO FERNANDEZ HERRANZ. El

MINISTERIO FISCAL, se ha adherido al recurso interpuesto.

Ha sido ponente el Excm. Sra. Magistrada D<sup>a</sup>. Pilar de la Oliva Marrades.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS RUBIDO DE LA TORRE, Magistrado de la Iltma. Audiencia Provincial de Valencia, designado Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en la causa del Tribunal del Jurado N<sup>o</sup> 10/2017, dimanante de las Diligencias del Jurado N<sup>o</sup> 1/2014, instruidas por el Juzgado de Instrucción N<sup>o</sup> 5 de Catarroja, se dictó la Sentencia N<sup>o</sup> 59/2017, de fecha 26 de enero, en la que se declararon probados según el veredicto del Jurado los siguientes hechos:

" Albertomayor de edad, y con antecedentes penales, condenado anteriormente en sentencia del Juzgado de lo Penal n<sup>o</sup> 3 de Gijón de 13.4.2014 por delito contra la seguridad del tráfico, trabajaba en el año 2014 prestando sus servicios como empleado, agente comercial, de la empresa "VALCOBROS SL. El Cobrador del Frac" mercantil dedicada al cobro de deudas.

*El día 20 de enero de 2014, sobre las 12,00 horas, Albertoacudió al domicilio particular de Luis Enrique, situado en la CALLE000N<sup>o</sup> NUM000, de Alfafar (Valencia), vestido con ropa de traje negro y usando un coche rotulado como "Cobrador del Frac". Llamó a la puerta de entrada de la casa, siendo recibido por Rosana, madre del dueño, de 84 años de edad. Su visita fue debida a la notificación de una deuda al señor Luis Enrique, que en ese momento no estaba en el domicilio. En la vivienda estaban la esposa y la madre del señor Luis Enrique, Nataliay Rosana. Tras una conversación, el señor Albertodejó una tarjeta de visita con su teléfono, tarjeta con el membrete de El Cobrador del FRAC. Al día siguiente, 21 de enero de 2014, Luis Enriqueinterpuso denuncia ante la Guardia Civil de Catarroja alegando que el señor Alberto había entrado en su domicilio, sin permiso alguno, el día anterior, que además dijo ante su madre y su pareja, en el domicilio, varias frases de contenido amenazante".*

**SEGUNDO.-** Después de exponer los Fundamentos de Derecho que estimó procedentes, el Fallo de dicha sentencia fue del siguiente tenor literal:

**"QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO** a Alberto de los delitos de allanamiento de morada y del delito de amenazas objeto del juicio oral con tribunal de Jurado, con todos los pronunciamientos favorables, con declaración de oficio de las costas procesales".

**TERCERO.-** Contra la referida sentencia, por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> PAULA MIGUEL RUIZ en nombre y representación de los acusadores particulares D<sup>a</sup> Natalia, D<sup>a</sup> Rosanay D. Luis Enrique, se interpuso recurso de apelación por el que solicitaba de esta Sala que estimando el recurso interpuesto se dicte nueva sentencia por la que por contrario imperio se condene al acusado y responsable civil con arreglo a sus conclusiones definitivas.

**CUARTO.-** Tras ello se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 846 bis d), impugnara o interpusiera recurso supeditado al de apelación en el término de cinco días, habiéndose formulado, en evacuación del trámite conferido, por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup>. MARIA TERESA FABRA MIRO en nombre y representación de D. Alberto y por la Procuradora de

los Tribunales D<sup>a</sup>. NURIA VILLALBA GIL en nombre y representación VALCOBROS, S.L., al amparo de lo establecido en el artículo 846 bis b) y d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, escrito de oposición al recurso de apelación antes referido, pidiendo de esta Sala que dicte sentencia desestimando el recurso de apelación inicial. Por el contrario el MINISTERIO FISCAL presentó escrito por el que se adhería al recurso de apelación interpuesto.

**QUINTO.-** Seguidamente se tuvo por interpuesta la oposición a la apelación antes referidas, y se acordó emplazar a las partes para que dentro del término improrrogable de diez días se personaran ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

**SEXTO.-** Remitidos los autos a Sala y recibidos en la misma, se turnó de ponencia y se determinó la composición de la Sala con arreglo a las normas de reparto correspondientes; se señaló la celebración de la vista de apelación con citación de las partes, para el día 16 de abril de dos mil diecisiete, habiendo comparecido ante esta Sala el Ministerio Fiscal y las referidas representaciones quienes en dicho acto solicitaron fuera dictada sentencia con arreglo a sus respectivas posiciones. Acto celebrado con la comparecencia personal del acusado, como es preceptivo.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** Como ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala en reiteradas ocasiones, de las que particularmente podríamos destacar nuestra sentencia núm. 2/11 de 20 de enero, el recurso que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal frente a las sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, aun cuando se denomine de apelación, no es un verdadero recurso de apelación pleno, una doble instancia, ni siquiera una apelación limitada. Estamos ante un recurso extraordinario. No creemos que sea necesario insistir demasiado en las diferencias existentes entre un recurso ordinario y otro extraordinario, que como bien es sabido este último se caracteriza porque su posible contenido viene determinado en la ley por medio de la fijación de motivos concretos, de modo que: 1) La admisión del recurso viene condicionada por el presupuesto procesal de que se alegue por la parte precisamente uno de esos motivos, 2) El órgano competente para conocer del recurso tiene sus poderes limitados al conocimiento de esos motivos, por lo que ante él no puede llevarse todo el contenido de lo debatido y resuelto en la instancia, sino únicamente las materias que vienen determinadas por los motivos, y 3) Dentro del ámbito de lo que puede llevarse al conocimiento del órgano competente para conocer del recurso, la parte recurrente ha de precisar qué se lleva efectivamente a ese conocimiento, de modo que el órgano competente ha de limitar su decisión a esos motivos, sin que pueda sobreentender nada.

Afirmación que ha sido plenamente admitida por la jurisprudencia. El primer pronunciamiento en este sentido fue en nuestra sentencia de fecha 2 de octubre de 1996, en la que ya se partía de la necesidad de incardinar el recurso en el ámbito de los recursos extraordinarios, pese a su denominación legal, y ha sido después reiterado sin dejar margen a la duda. Pueden verse así las SSTSJ Andalucía de 11 de noviembre de 1996, Cataluña de 20 de mayo de 1997, de 7 de julio de 1997, de 14 de julio de 1997, que reitera la anterior, Andalucía de 20 de noviembre de 1997, que vuelve a aludir al "carácter especial o híbrido". Hasta el Tribunal Supremo se ha percatado de esta naturaleza extraordinaria, al referirse a que no es "pese a su denominación, ordinario como el normal de apelación, sino extraordinario y aun atípico en nuestro ordenamiento jurídico-procesal" (STS de 11 de marzo de 1998).

Por ello, tal como señalábamos en nuestras sentencias núm. 9/2012 de 10 de mayo y 7/2012 de 27 de marzo, dada la existencia de motivos tasados, el escrito de interposición debe estar redactado con una técnica jurídica precisa y rigurosa, asimilable a la exigida por el artículo 874 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el escrito de interposición del recurso de casación, de modo que la inobservancia de la precisión requerida en la formulación y en la determinación del motivo, o de cada uno de los motivos en que el recurso se funde podrá ser determinante de su desestimación por causa de inadmisión. En consonancia a lo cual anterior y de manera reiterada, este Tribunal ha venido especificando cuáles son los requisitos que el escrito de interposición del recurso debe cumplir, y entre ellos se encuentran los imperativos formales a que se ha hecho referencia, y cuáles son las consecuencias de su inobservancia (véase, por ejemplo, la Sentencia de 19 de septiembre de 2002), y entre ellas se halla la desestimación por razones procesales y no de fondo. Pero este Sala igualmente ha declarado "que, aunque no se especifique correctamente en el enunciado el motivo o submotivo, o aunque no se observe en su posterior exposición la exactitud, precisión y separación debidas, en la medida en que del desarrollo argumental contenido en el escrito de interposición resulte posible conocer cuál es el concreto motivo legal en que el recurso se fundamenta, de modo que las demás partes puedan impugnarlo primero y debatir después sobre él, el tribunal podrá estar en disposición de resolver sobre la cuestión planteada como objeto del recurso".

**SEGUNDO.-** Sobre esta base aun cuando asumiéramos un criterio amplio y obviáramos la falta de técnica procesal, la ausencia de alegación de un motivo concreto de los que se contienen en el artículo 846 bis c de la LECr, nos encontramos que en definitiva el recurso se centra en cuestionar la valoración de la prueba que efectúa el tribunal del jurado. Alegato que aun en el ámbito más amplio del procedimiento abreviado a tenor de la vigente regulación que se hace en ese proceso del recurso de apelación ordinario a tenor del artículo 790 LECr, nunca hubiera admitido que sencillamente se revocara una sentencia absolutoria para dictar una nueva resolución acorde a los pedimentos de la acusación. En el ámbito más reducido del procedimiento del jurado en que nos movemos, nos encontramos ante un recurso de naturaleza extraordinaria, en cuyo ámbito los motivos en que puede fundarse se hayan delimitados por la Ley de modo taxativo, y entre ellos no se encuentra nada que permita revalorar la prueba para disentir del modo en que la valoró el Jurado.

Ya que tal como igualmente hemos reiterado en multitud de ocasiones, de la que puede ser un perfecto exponente nuestra sentencia núm. 2/2011 de 20 de enero, esta Sala no puede, por que no está incluido en el ámbito de su competencia delimitado por los motivos del recurso conforme a la Ley, sustituir la valoración de la prueba realizada por el Jurado y plasmada en el veredicto, y ello por dos órdenes de razones:

1ª) Una de ellas se basa en la misma naturaleza de lo que es el juicio ante Jurado. Si la Constitución en el artículo 125 permite atribuir potestad jurisdiccional a los ciudadanos a través de la institución del Jurado y si luego eso se hace efectivo por medio de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, dicho está que no podía en esa Ley o en la de Enjuiciamiento Criminal desvirtuarse la esencia de lo que es el Jurado, posibilitando que el órgano jurisdiccional competente para conocer de un recurso, formado exclusivamente por jueces profesionales, suplantara la misión esencial de los ciudadanos que es la de establecer en el veredicto los hechos que se consideran probados. Para el ejercicio del núcleo esencial de la misión del Jurado es elemento determinante detentar la exclusividad en la valoración de la prueba, y en la misma no puede existir control por el órgano al que se atribuya el conocimiento de un recurso.

2ª) La otra de las razones atiende a lo que puede hacerse es un recurso contra la sentencia dictada después de un juicio oral del que forma parte determinante de su configuración la plena aplicación del principio de inmediación en la práctica de las pruebas. Si el proceso penal se configura con base en el principio de oralidad pero, sobre todo, en el principio de inmediación, de modo que la convicción del tribunal sobre los hechos sólo puede atender a lo oído y visto en el acto concentrado del juicio oral, careciendo de toda fuerza de convicción lo practicado en el procedimiento preliminar, carece de sentido jurídico permitir después un recurso de apelación en el que un segundo tribunal pueda llegar a una valoración distinta de los medios de prueba que no se han practicado ante él y de los que tiene exclusivo conocimiento por el reflejo documental de lo ocurrido en el juicio oral. Si la inmediación es determinante del modo de organizar el proceso en la instancia, sería absurdo que la inmediación se negara completamente en el recurso.

Por lo que en esta medida procederá desestimar el presente recurso, dado que en definitiva lo que pretende es que rechazando la valoración de la prueba efectuada por el jurado, tras aceptar la base fáctica sostenida por el recurrente pasemos a efectuar un pronunciamiento condenatorio con arreglo a sus pedimentos, lo que además al margen de exceder del reducido marco procesal en que nos movemos, chocaría con la moderna doctrina constitucional, que precisamente fundada en la inmediación de que ha gozado el tribunal de instancia, nos impediría dejar sin efecto un pronunciamiento absolutorio, sin haber dado una previa audiencia al acusado, lo que determina que actualmente tras la reforma llevada en el artículo 790 de la LECrpor Ley 41/2015 de 5 de octubre, dentro del ámbito del procedimiento abreviado, para combatir una naturaleza de esta índole se deje limitado a una eventual nulidad, fundada exclusivamente "en el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas".

**TERCERO.-** No habiendo lugar a la estimación de ninguna de las alegaciones del recurso de apelación formulado, procederá desestimarlo y por tanto confirmar la sentencia objeto del mismo. Atendida la desestimación del recurso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 en relación con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cabrá imponer a la parte recurrente el pago de las costas procesales correspondientes a esta instancia.

En consideración a lo expuesto,

## **FALLAMOS**

**PRIMERO: DESESTIMAR** el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª PAULA MIGUEL RUIZ en nombre y representación de Dª Natalia, Dª Rosanay D. Luis Enrique, así como la adhesión formulada por el MINISTERIO FISCAL.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todos sus extremos la sentencia objeto de impugnación.

**TERCERO: CONDENAR** a la parte recurrente al pago de las costas procesales correspondientes a esta instancia.

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, con la advertencia de que contra la misma cabe preparar ante este mismo Tribunal,

recurso de casación para ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días, a contar desde la última notificación, en los términos del artículo 847 y por los trámites de los artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y una vez firme, devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de su procedencia, con testimonio de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Extendida y debidamente firmada la anterior resolución definitiva en el día de su fecha, se procede a su publicación y depósito en la Oficina Judicial en la forma establecida en el art. 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.